**Economía verde y urbana: importancia, avances, oportunidades y retos para Costa Rica**

**Fernando Rodríguez Garro**

**Organización de Estudios Tropicales (**fernando.rodriguez@tropicalstudies.org**)**

**Juan Daniel Acuña Román**

**Organización de Estudios Tropicales** (juan.acuna@tropicalstudies.org)

**L**a economía global se ha beneficiado enormemente de la industrialización y el aumento de la capacidad de consumo de la población planetaria, que ha permitido incrementar la producción en relación con la primera mitad del siglo pasado. Nunca en la historia se ha experimentado una creación y acumulación de riqueza como la que evidenciamos en la actualidad. A esta generación y acumulación de riqueza le hemos llamado desarrollo económico, y erradamente se le ha atribuido las cualidades de progreso, felicidad y bienestar material general.

Estas equívocas cualidades del desarrollo económico, centrado en el aumento ilimitado de la producción, han llevado a las economías a una constante búsqueda de mayor crecimiento económico; sin embargo, su consecución se ha visto acompañada de una degradación del ambiente, el bienestar y la calidad de vida. Esto no es una argumentación en detrimento del crecimiento económico, en donde éste sea una carga o mal para la sociedad. Si no que, *el desarrollo económico es más complejo de lo que se planteó décadas atrás*.

Nuestras economías han basado su crecimiento en el uso intensivo del capital (humano, físico y natural), el cual se ha visto limitado por las tasas de extracción y de reproducción, así como por los acervos existentes de estos capitales. Estas limitaciones de crecimiento han orientado la innovación y el desarrollo de los países hacia mecanismos más intensivos para la extracción y la búsqueda de nuevos acervos de capital (existentes o sustitutos). Dicha innovación y desarrollo ha —en su mayoría— implicado un uso del capital natural que no contempla las necesidades inter temporales de la sociedad, la capacidad de reproducción del capital natural, ni el impacto de la degradación ambiental sobre la oferta y demanda agregada.

En los últimos cuarenta años se han creado diversas metodologías para reflejar de una manera más integral y realista el desarrollo. Amartya Sen, premio Nobel en economía, impulsó en la década de 1980 la teoría del desarrollo sostenible y, desde entonces, diversas personas expertas en economía, política, filosofía, entre otras ciencias, han profundizado en el tema del desarrollo sostenible, definido en su momento como aquel “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”[[1]](#footnote-1).

En la actualidad, existen grandes retos para cuantificar, promover y alcanzar un desarrollo sostenible. Pearce *et al.* (1989) argumentaban que es imposible alcanzar el desarrollo sostenible sin una transición a una economía verde. Esto debido a que los actuales sistemas de producción se encuentran sesgados al agotamiento del capital natural para garantizar su crecimiento. Producto de este análisis surge la necesidad de realizar una transición de una economía tradicional a una economía verde[[2]](#footnote-2).

**C**osta Rica: avances hacia la transición de economía verde. El 3 de octubre del 2016 la Asamblea Legislativa costarricense ratificó el acuerdo de París. Un tratado internacional que compromete al país a una ambiciosa trayectoria de reducción de emisiones con el fin de mantener el incremento de temperatura por debajo de los 2.0 °C. El Acuerdo de París tiene como fin conservar la vida como la conocemos y alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, que el consumo de hoy no perjudique el consumo de las generaciones futuras.

La ambición y accionar de Costa Rica ante el cambio climático han marcado un liderazgo a nivel internacional, en donde destaca su matriz eléctrica 99.8 % de fuentes renovables y el pago por servicios ambientales, el cual ha financiado más de 1.1 millones de hectáreas entre 1997 y 2016 (Sánchez-Chaves y Navarrete-Chacón, 2017). De igual manera, el país lanzó en 2018 el Plan Nacional de Descarbonización, que es parte del compromiso del país para “sentar las bases de la nueva economía del siglo XXI, capaz de responder a los cambios del contexto mundial, transitando hacia una economía verde” (Decreto Ejecutivo No 41561-MP-MINAE, 2019). Adicionalmente, el plan se decretó de interés público y nacional, y fue un insumo clave para el desarrollo de otras políticas nacionales de desarrollo e inversión para los años siguientes. Asimismo, en 2021, el país lanzó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cual tiene como objetivo orientar acciones hacia “la consecución de un modelo de desarrollo que garantice la resiliencia climática de la sociedad costarricense, que evite las pérdidas humanas y modere los daños materiales generados por los efectos adversos del cambio climático, que contribuya a aumentar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, y que aproveche oportunidades para innovar y transformar los sectores productivos y asegurar la continuidad de los servicios” (DCC y MINAE 2022).

Aunado a esto, el país ha liderado propuestas y alianzas internacionales que apoyan la transición hacia una economía verde como, por ejemplo, *Beyond Oil and Gas Alliance*, la Alianza Internacional para las Áreas Marinas Protegidas, la Biodiversidad y el Cambio Climático, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (más conocido como el Acuerdo de Escazú)*,* entre otras más*.*

**O**portunidades de una economía verde para Costa Rica. La transición a una economía verde es inminente e impostergable por el bien de la misma economía, el bienestar de las personas y de la biodiversidad. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ha elaborado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Groves *et al*., 2020), un estudio que demuestra que el Plan Nacional de Descarbonización contribuye en más de 40 mil millones de dólares en beneficios netos a la economía costarricense al 2050.

Asimismo, el liderazgo del país en temas ambientales le ha permitido acceder a condiciones blandas de financiamiento internacional, así como opciones de financiamiento no reembolsable. Costa Rica cuenta con un capital humano, físico y natural sumamente especializado, capaz de impulsar la transición a una economía verde y aumentar la productividad nacional. Entre estas capacidades destaca la posibilidad del país de utilizar la matriz eléctrica 100 % renovable para brindar energía a la flotilla vehicular eléctrica (transporte colectivo e individual), la cual es causante del 42 % (MINAE-IMN, 2021) de los gases de efecto invernadero del país, así como de pérdidas de hasta 3.8 % del PIB producto de la congestión vehicular (Programa Estado de la Nación, 2018). Es importante considerar que la importación de combustibles fósiles presiona la balanza de pagos del país, y las variaciones de sus precios (muy inestables, dicho sea de paso) es una de las principales causas de los vaivenes recientes de la inflación y de la devaluación de la moneda costarricense.

Un país democrático, estable, con una hoja de ruta para descarbonizar y adaptar la economía ante el cambio climático, es parte del *gran atractivo del país ante inversionistas internacionales. Una economía verde reduce significativamente riesgos financieros* que enfrentan los inversionistas (riesgos físicos y de transición). La economía verde es parte de nuevas tendencias de innovación y desarrollo a nivel internacional, que permiten un mayor y mejor crecimiento en productividad y bienestar humano. Costa Rica posee grandes ventajas comparativas para hacer la transición hacia una economía verde, desaprovecharlas podría significar un gran estancamiento en temas sociales, ambientales y productivos. El país cuenta con las hojas de ruta y estudios necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible, lo que constituye una gran ventaja para crear, orientar y acceder a los recursos financieros necesarios para su implementación.

**R**etos para la transición hacia una economía verde. Costa Rica enfrenta grandes retos para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo. El principal reto del país desde una perspectiva macroeconómica es gestionar y garantizar los recursos necesarios para desarrollar las inversiones requeridas para asegurar la transición a una economía verde. El país requiere de una gran inversión para hacer esa transición de forma paulatina, que permita a los diferentes sectores de la economía formar parte del cambio. Diversos esfuerzos del Poder Ejecutivo, en conjunto con la cooperación internacional, han sido y están siendo desarrollados para este fin.

Por otro lado, el país enfrenta el gran reto de crear un marco regulatorio que permita *nivelar la cancha* entre los incentivos para una economía verde y los mecanismos de incentivos de economía tradicional. Es de conocimiento común que algunas políticas regulatorias del país se encuentran basadas en la promoción del uso intensivo de hidrocarburos y en promover actividades que emiten gases de efecto invernadero (GEI), y que carecen de mecanismos que analicen, internalicen y resuelvan las externalidades causadas, tanto por un modelo de desarrollo extractivista (negativas) como por un modelo sostenible (positivas). Por ello es importante crear incentivos, subsidios y tributos que disminuyan las imperfecciones e ineficiencias ambientales del mercado.

Adicionalmente, hay un gran reto por parte de los hogares y el sector privado en ser parte de esta transición hacia una economía verde. Debe crearse conciencia en estos sobre sus formas de producción y niveles de consumo, por medio de una mayor inserción financiera, una mayor disposición a pagar por las externalidades negativas, innovación tecnológica y la inclusión de formas de consumo amigables con el ambiente.

La transición a una economía verde requerirá de una cantidad importante de recursos financieros, tanto públicos como privados, a fin de financiar ese cambio, además de orientar los incentivos y los recursos de los presupuestos públicos a lograr ese fin. Nuestro sistema tributario, por ejemplo, tiene exoneraciones y tratamientos favorables para el consumo de hidrocarburos de algunos sectores (pesca, aeronáutico y de flota mercante), la adquisición de agroquímicos contaminantes y la importación de vehículos usados, aspectos que son incompatibles con una economía verde. Por otro lado, adolecemos de incentivos para impulsar una economía circular, el manejo adecuado de residuos sólidos, la correcta disposición de aguas residuales y el impulso a gran escala a un proceso de electrificación del transporte público.

Reformas puntuales en nuestro sistema tributario deberán hacerse en próximos años a fin de alinear incentivos y desincentivos con ese proceso de transición, en una serie de ajustes que tenga como norte el impulso a una nueva economía y no necesariamente una finalidad recaudatoria. De igual manera deberá orientarse a ese proceso el presupuesto público, los recursos y compromisos en él contenidos, la inversión pública y los planes de gastos e inversión del sector público descentralizado. Los gobiernos locales son claves en esa transición, pues adaptar las ciudades a una nueva realidad es fundamental y nuestra Gran Área Metropolitana, vista como una gran metrópoli, debe ser la punta de lanza de ese proceso.

Hay que repensar las ciudades como un espacio para la movilidad sostenible de las personas, donde la ciudad no antagonice con el espacio natural, sino que más bien se integre con él. Ciudades compactas, resilientes a un clima cambiante, que no se conviertan en islas de calor, con un transporte público eficiente y limpio, son las ciudades del futuro.

Finalmente, se requiere de férrea voluntad política para realizar los cambios estructurales necesarios en este proceso. Es importante el compromiso por parte de los tres poderes de la República para garantizar una transición hacia una economía verde, así como la toma de decisiones alimentada constantemente por insumos técnicos y científicos que brinden robustez. Esa toma de decisiones debe de estar orientada al bienestar general de la población en el corto, mediano y largo plazo, y que, a pesar de presiones o intereses específicos, pueda apoyar a todos los sectores hacia un desarrollo sostenible.

**Referencias**

Decreto Ejecutivo No 41561-MP-MINAE. (2019). [Ministerio de la Presidencia y Ministerio de Ambiente y Energía]. Declaratoria de interés público y nacional del "Plan de Descarbonización Compromiso del Gobierno del Bicentenario". Diario Oficial La Gaceta, n.º 36, 20 de febrero del 2019.

DCC, MINAE. (2022). *Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica, 2022 - 2026*. Dirección de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente y Energía. <https://cambioclimatico.go.cr/wp-content/uploads/2022/04/NAP_Documento-2022-2026_VC.pdf>

Groves, D. G., Syme, J., Molina-Perez, E., Calvo, C., Víctor-Gallardo, L., Godinez-Zamora, G., Quirós-Tortós, J., De León, F., Saavedra Gómez, V. y Vogt-Schilb, A. (2020). *The benefits and costs of decarbonizing Costa Rica’s economy: informing the implementation of Costa Rica's National Decarbonization Plan under uncertainty*. IDB Monograph, 863. Inter-American Development Bank. <http://dx.doi.org/10.18235/0002870>

MINAE, IMN. (2021). *Inventario Nacional de gases de efecto invernadero y absorción de carbono 1990-2017*. Ministerio de Ambiente y Energía Instituto Meteorológico Nacional <http://cglobal.imn.ac.cr/documentos/publicaciones/InventariosGEI/InventarioGEI-2017/offline/InventarioGEI2017.pdf>

Pearce, D., Markandya, A., y Barbier, E. B. (1989). B*lueprint for a green economy (Report for the Department of Environment, UK, prepared by the London Environmental Economics Centre)*. Earthscan Publications Ltd.

Programa Estado de la Nación. (2018). *Informe 2018: Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible.* <https://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/2983>

Sánchez-Chaves, O., y Navarrete-Chacón, G. (2017). La experiencia de Costa Rica en el pago por servicios ambientales: 20 años de lecciones aprendidas. *Revista De Ciencias Ambientales*, *51*(2), 195-214. <https://doi.org/10.15359/rca.51-2.11>

UNEP. (2011). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers. [www.unep.org/greeneconomy](http://www.unep.org/greeneconomy)

.

1. Consenso alcanzado sobre la definición de desarrollo sostenible de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo publicado en su informe en 1987. [↑](#footnote-ref-1)
2. “aquella economía que resulta en un mejor bienestar humano y equidad social, reduciendo significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas” (UNEP, 2011). [↑](#footnote-ref-2)